

E

Editorial

Los millonarios morosos del CAE

El Ministerio de Hacienda anunció el inicio de cobros ejecutivos a 1.800 personas que deben el beneficio pese a tener rentas altas.

Las recientes cifras de morosidad en el Crédito con Aval del Estado dadas a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revelan uno de los problemas más graves que vive el sistema de financiamiento universitario: el incumplimiento de las reglas mínimas establecidas para que una formación superior de calidad no termine con las finanzas públicas en la quiebra. No se trata solamente de los 1.800 beneficiarios del CAE que no pagan su deuda pese a ganar \$ 5 millones o más de remuneración mensual, sino también de las prácticas defraudatorias instaladas en el sistema, donde cientos de familias mienten al llenar los formularios de postulación a la gratuidad, muchas veces asesoradas por especialistas que han constituido una verdadera industria paralela de elusión de las obligaciones financieras con el Estado. Agravó este escenario el anuncio de fin al CAE que hizo el Gobierno de Gabriel Boric. Pese a que no contaba con el respaldo político necesario para insta-

Es totalmente justo el paso que está dando el Gobierno al exigir el pago a los morosos del CAE, pero queda pendiente la aplicación de cambios más profundos y duraderos.

lar un nuevo mecanismo de crédito universitario ni con el apoyo total de las universidades que se verían impactadas, el Presidente insistió en que el tema era una prioridad de su mandato, provocando un efecto dominó que prácticamente paralizó el cumplimiento de los pagos. Ambos fenó-

menos son síntomas que dejan al descubierto un grave problema de diseño en esta política de beneficios estatales, que no consideró mecanismos adecuados de control previo de los antecedentes proporcionados por los alumnos en la búsqueda de un porcentaje de gratuidad, ni etapas de fiscalización capaces de detectar inconsistencias o engaños. Dejar el rol de control a las universidades, instituciones que no tienen ni la experiencia ni la capacidad logística para hacerlo, fue un segundo error que debe ser subsanado. Es totalmente justo el paso que está dando el Gobierno al exigir el pago a los morosos del CAE, pero queda pendiente la aplicación de cambios más profundos y duraderos.